

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento Penitenciario, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dicho lo anterior, el Proyecto sometido a informe tiene por objeto la reforma de determinados preceptos del reglamento Penitenciario, resultando relevante a los efectos de la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 la modificación llevada a cabo por medio del apartado uno del artículo 6 del mencionado Reglamento, en cuya virtud se da nueva redacción al apartado 2 del precepto y se añade un nuevo apartado 4 al mismo a fin de, como se señala en la Exposición de Motivos “dotar de cobertura reglamentaria a los ficheros de internos de especial seguimiento”.

Respecto de la primera de las reformas citadas, el texto del nuevo apartado 2 del artículo 6 del Reglamento tiene por único efecto reemplazar la referencia específica efectuada hasta ahora a la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, por una referencia genérica a “la legislación sobre protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo”, no procediendo efectuar comentario adicional al mismo, habida cuenta de que la citada Ley Orgánica 5/1992 fue derogada por la vigente Ley Orgánica 15/1999.

En cuanto al nuevo apartado 4 del artículo 6 del Reglamento, se establece en el Proyecto sometido a informe que “la Administración penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad de los establecimientos y la integridad de los internos”, añadiendo que “en ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto de aquél que reglamentariamente corresponda”.

Esta previsión supone el establecimiento de un supuesto de tratamiento de datos de carácter personal, que necesariamente quedará sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 y sus disposiciones de desarrollo, conforme a lo determinado por el artículo 6.2 del Reglamento Penitenciario,

siendo preciso que dicho tratamiento resulte amparado por la mencionada Ley Orgánica 15/1999.

El artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone, como regla general, que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Si bien el artículo 6.2 dispone en su primer inciso que “No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias”, la jurisprudencia, en particular a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de diciembre, ha venido considerando que esta previsión únicamente legitimará el tratamiento de los datos en caso de que la competencia a la que la misma se refiera proceda de lo dispuesto en la Ley, exigible, por tanto, como norma habilitante del tratamiento.

En relación con la habilitación legal para el tratamiento de los datos de carácter personal, el artículo 10.2 a) del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establece que “será posible el tratamiento o la cesión de los datos de carácter personal sin necesidad del consentimiento del interesado cuando (...) lo autorice una norma con rango de Ley o una norma de derecho comunitario y, en particular, cuando concorra uno de los supuestos siguientes:

- El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dichas normas, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales de los interesados previstos en el artículo 1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
- El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga una de dichas normas”.

De este modo, si el existe una norma con rango de Ley que imponga a la Administración penitenciaria o a los internos un deber para cuyo adecuado tratamiento resulte necesario el tratamiento de datos de carácter personal, cabrá considerar que dicha Ley ampara y legitima el tratamiento, de modo que la disposición reglamentaria a la que ahora se está haciendo referencia sería conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

Tal y como se ha indicado, el artículo cuya inclusión se pretende prevé que los ficheros serán creados con la finalidad de “garantizar la seguridad y orden de los establecimientos y la integridad de los internos”.

Pues bien, el artículo 4 de la Ley General Penitenciaria establece las obligaciones y deberes de los internos, disponiendo que “Los internos deberán:



- a) Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir las condenas que se les impongan, hasta el momento de su liberación.
- b) Acatar las normas de régimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento, cumpliendo las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 44.
- c) Mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias y autoridades judiciales o de otro orden, tanto dentro de los establecimientos penitenciarios como fuera de ellos con ocasión de traslado, conducciones o prácticas de diligencias.
- d) Observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento”.

Al propio tiempo, el artículo 41.1 de la Ley añade que “El régimen disciplinario de los establecimientos se dirigirá a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada”.

Igualmente, según el artículo 3 de la Ley “La actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los reclusos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza”, disponiendo el apartado 4 que “la Administración penitenciaria velará por la vida, integridad y salud de los internos”.

De este modo, en cuanto el tratamiento de los datos vaya dirigido exclusivamente a la garantía de la integridad de los internos o al mantenimiento adecuado de la seguridad y orden en el centro penitenciario, puede entenderse que los ficheros a los que se refiere el artículo 6.4 del Reglamento, en la versión dada al mismo por la norma sometida a informe, se encuentra amparado por los artículos 3, 4 y 41 de la Ley General Penitenciaria, y en consecuencia, por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

Dicho lo anterior, debe recordarse que dichos ficheros quedarán íntegramente sometidos a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, por lo que, conforme al artículo 4.1 de la misma únicamente deberán contener datos que sean “adecuados, pertinentes y no excesivos” en relación con las finalidades que se establecen en el propio precepto, no pudiendo, conforme al artículo 4.2 emplearse ni tratarse para fines distintos, lo que parece ponerse de manifiesto a través del inciso final del precepto.

Por último, y desde el punto de vista formal, es preciso igualmente recordar que será precisa la adopción de la correspondiente norma de creación del fichero, tal y como impone el artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, resultando igualmente de aplicación lo establecido en el artículo 6.3 del

reglamento Penitenciario, que dispone que “Las autoridades penitenciarias responsables de los ficheros informáticos penitenciarios adoptarán las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal en ellos contenidos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y estarán obligadas, junto con quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento automatizado de este tipo de datos, a guardar secreto profesional sobre los mismos, incluso después de que haya finalizado su relación con la Administración penitenciaria”.

A la vista de todo ello, se informa favorablemente el Proyecto sometido al parecer de la Agencia.